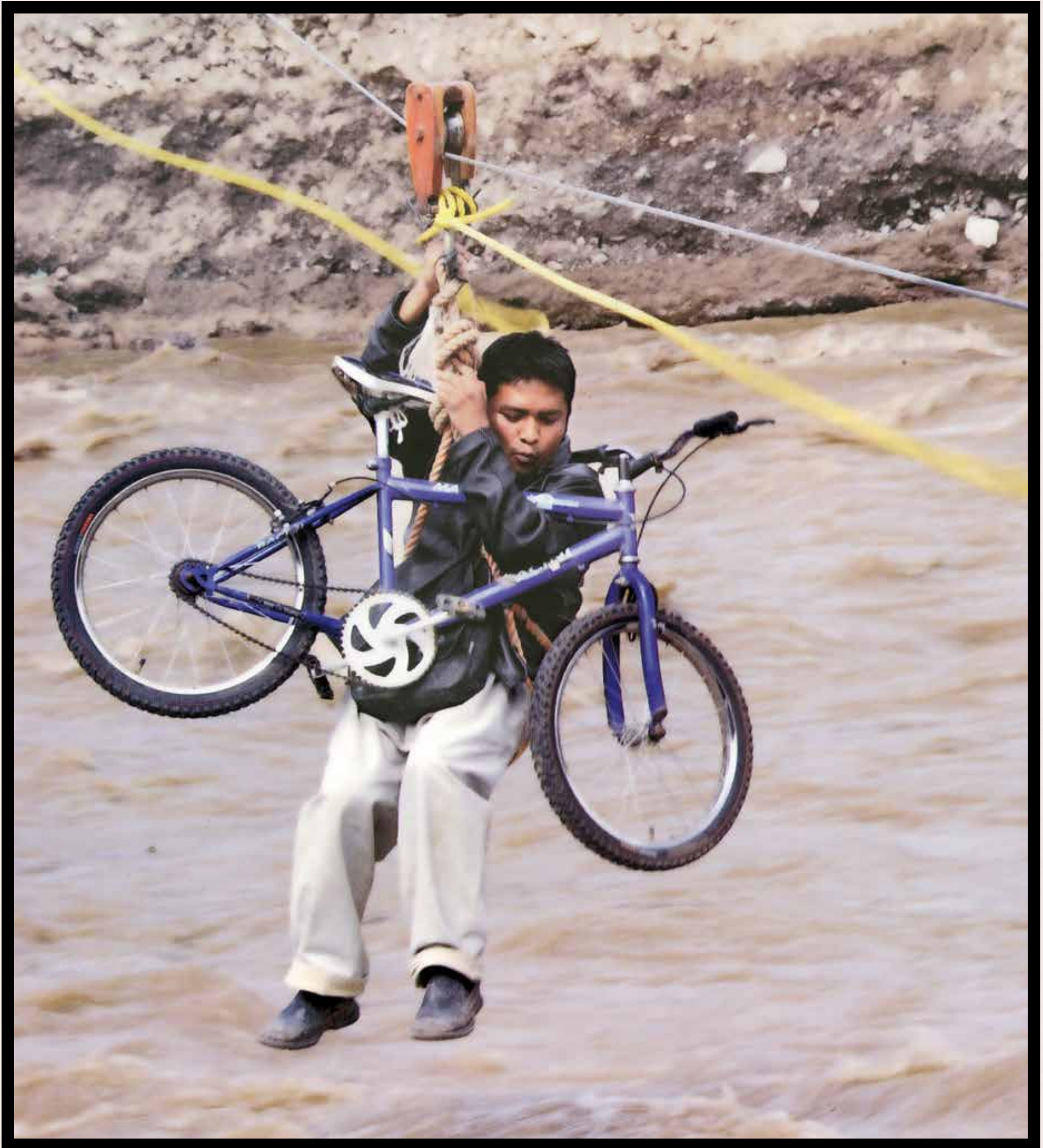


ATENCO: OTRA VEZ EL AEROPUERTO

Ojarasca

La Jornada



Colapso del puente Xía, Ixtlán de Juárez. Oaxaca, 2010. Foto: Baldomero Robles

ABANDONADOS Y AGREDIDOS: **Alfredo Zepeda**
TRISTE CANCIÓN MIXTECA EN NUEVA YORK:
Rodolfo Hernández Corchado
FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA EN OAXACA

VIENEN POR TODO

- XOCHIMILCO Y TLÁHUAC
- ISTMO DE TEHUANTEPEC
- SIERRA NORTE DE PUEBLA
- BARILLAS, GUATEMALA

VIENEN POR TODO

Las **dichosas reformas** —estructurales y se aguantan, pollos pelones—, cantadísimas por empresarios, legisladores y funcionarios, significan para el pueblo mexicano, para los de abajo, con dedicatoria especial a las comunidades indígenas, una sola y misma cosa: despojo. Un cambio radical en sus vidas, fuera del control de las gentes que, eso, pierden el control sobre su espacio físico y sensorial, sus cementerios, sembradíos, caseríos, riberas, lomas, costas, calles, bosques, sitios sagrados. Y por ende perderán cualquier posibilidad legal y consuetudinaria de gobernarse, cuidar de su sustento y su cultura, incluyendo sus lenguas y memorias colectivas ligadas íntimamente a las tierras y aguas donde habitan, los aires que respiran.

De todo lo cual son guardianes y depositarios, y de donde la reconversión capitalista global hace todo y de todo para expulsarlos a cambio de alguna maldición: sea el ¿mucho? dinero, sea el poco o ninguno. Sean el exilio, la explotación laboral, la enajenación, la exclusión en las decisiones territoriales, educativas, de salud. O bien sea la muerte de sus identidades propias, que nunca les impidieron ser mexicanos. Hoy, los amos de México Inc. están empeñados en que dejen de ser lo que son. Sea lo que sea.

¿Pluriculturalismo? ¿Multilingüismo? ¿Matriz civilizatoria distinta? Pregúntele a cualquier banquero, juez, alto burócrata, contratista, inversionista, si esos conceptos les dicen algo, la neta. Nada significan para ellos aunque patrocinen museos de artesanía y limosnas a nivel ventanilla, que no se hagan. Esto les permite pasarse por donde pueden la letra constitucional que ampara determinados derechos, conquistados con mucho esfuerzo por ese pueblo mexicano cuyos hijos y nietos, según los cálculos, van para fuera. Igual con los tratados internacionales, y apurándose, los derechos universales que en un mundo menos hipócrita y más justo serían inalienables: la autodeterminación, la consulta, la soberanía alimentaria y territorial.

¿Qué diferencia la progresiva destrucción de Palestina por invasión programada de colonos israelíes frecuentemente llegados de Rusia y anexas, de los torvos avances del capitalismo en su nueva fase priísta sobre las preciosas y fértiles tierras del lecho lacustre de Texcoco? ¿Que antes de los bulldózer mandaron los cheques, calculando que podrían con la resistencia de los campesinos atenquenses? Habría que mencionar los cientos de historias en todo el país de despojo, robo, emaciación de suelos, cultivos, agua y viento con la complicidad entusiasta de todos los gobiernos. De Sonora a Chiapas. De Veracruz a Michoacán y Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Guerrero, la península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec, el mar de California. O Chihuahua, Estado de México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y que no le digan, que no le cuenten... también la ciudad de la esperanza y las bicicletas. Ni la burla perdonan. Vaya y pregunte nomás en Tláhuac o Xochimilco.

¿Rubros? Minería, autopistas, almacenes de autoservicio, hoteles, hidroeléctricas, campos de golf, cárceles, monocultivos de kilómetros, ciudades “futuras” y “rurales”, perforaciones petroleras, torres eólicas en la proporción más voraz y masiva del planeta, aeropuertos, basureros... Usted dirá, patroncito.

¿Usted dirá? Los hijos de Zapata no han dicho la última palabra ☞

umbrell

FCO/ Fotografía Contemporánea en Oaxaca es un proyecto editorial de Luna Zeta Ediciones, Marabú Ediciones y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (2011), que con el respaldo de los artistas Francisco Toledo y Rubén Leyva puso en relieve la excepcional presencia de artistas visuales y reporteros gráficos que han escudriñado los días y los pueblos de la entidad en el último lustro. Aquí se ofrece una muestra mínima pero elocuente de la actual vitalidad expresiva de esas tierras, más allá de la mirada *guelaguetzeana* que, como apunta Abraham Nahón, las ha confinado “tercamente en una imagen idílica y estática”, que quisiera ocultar su modernidad alternativa, desobediente y singular ☞

GABINO CUÉ Y MAREÑA RENOVABLES CONTRA IKOOT Y BINNIZÁ

☞ **Valentina Valle** ☞

Oaxaca, Oaxaca

La **REPRESIÓN CONTRA LAS** comunidades organizadas que resisten a los proyectos ecológicos en el Istmo de Tehuantepec se ha expresado en las últimas semanas en detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y ataques violentos de la policía estatal y de grupos de golpadores contra las barricadas que los pobladores instalaron para impedir el acceso a las constructoras. Los primeros ecos de la resistencia se escucharon en enero, cuando se supo que la empresa Mareña Renovables estaba a punto de empezar el mayor parque eólico de México y uno de los más grandes de América Latina.

La compañía y el gobierno señalan que el proyecto de Mareña reducirá emisiones de dióxido de carbono hasta en un millón de toneladas por año, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que propone el uso supuestamente eficiente de la energía, la disminución del impacto ambiental de los combustibles fósiles y la conciliación de las necesidades de la sociedad con el cuidado de los recursos naturales.

Estos proyectos ya invadieron cientos de hectáreas de territorio istmeño, y lo que los habitantes observan son miles de litros de aceite, utilizados para lubricar turbinas, que contaminan suelos y aguas; los miles de toneladas de concreto en las bases de los aerogeneradores, que obstruyen los mantos acuíferos, modifican el paisaje permanentemente y producen un alto nivel de ruido electromagnético.

A finales de enero de 2013, la Asamblea Popular de los Pueblos del Istmo, con el respaldo de una orden judicial que suspendió las obras, impidió la entrada de la empresa a la Barra de Santa Teresa. La respuesta del gobierno fue inmediata y violenta, y así continúa. El saldo de estos ataques es decenas de heridos y torturados, y la operación de grupos de pistoleros con mecanismos paramilitares.

La tensión no cesa. El 24 de marzo, policías y golpadores intentaron disolver la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. A finales de marzo, el robo y allanamiento a Radio Totopo —emisora comunitaria adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona— en Juchitán, mostró que la represión continúa a través de múltiples estrategias. El 26 de marzo, la policía estatal intentó desalojar de manera violenta a la barricada que resiste al proyecto “Fuerza y Energía Bii Hioxho”, propiedad de la española Gas Natural Fenosa, en Juchitán.

La detención de Mariano López Gómez el 3 de abril, por un supuesto delito de extorsión —luego liberado por la presión de las organizaciones sociales—, y la orden de aprehensión contra Carlos Sánchez Martínez, coordinador de Radio Totopo, son indicadores de que las medidas represivas se fortalecen. La llegada de un avión de la Policía Federal el pasado 6 de abril a la ciudad de Oaxaca confirmó que la represión al movimiento social de 2006 continúa en estos “gobiernos del cambio”.

Los pueblos indígenas y las comunidades organizadas del Istmo saben que el panorama está lleno de dificultades. No es la primera vez que se tienen que defender. Saben que la defensa de la vida, el territorio, el mar y su gente es la única vía para existir como pueblos ☞



Muerte en Copala, 2007. Foto: **Antonio Turok**

La Jornada
Directora General: Carmen Lira Saade
Publicidad: Marco Hinojosa
Arte y Diseño: Francisco García Noriega

Ojarasca en La Jornada
Dirección: Hermann Bellinghausen
Coordinación editorial: Ramón Vera Herrera
Edición: Gloria Muñoz Ramírez
Redacción: Adazahira Chávez
Caligrafía: Carolina de la Peña
Diseño original: Francisco García Noriega
Retoque fotográfico: Alejandro Pavón Hernández
Asesoría técnica: Francisco del Toro
Versión en internet: Dimas Herrera

Ojarasca

Ojarasca en La Jornada, es una publicación mensual editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, SA de CV. Av. Cuauhtémoc 1236, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, CP. 03310, México DF. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en *Ojarasca*, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. ISSN: 0188-6592. Certificado de licitud de título: 6372, del 12 de agosto de 1992. Certificado de licitud de contenido: 5052. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 515-93. Registro provisional de Sepomex: 056-93. No se responde por materiales no solicitados.
Impreso en: Imprenta de Medios, SA de CV. Av. Cuitláhuac 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, México, DF.
suplementojarasca@gmail.com

ATENCO

OTRA VEZ EL AEROPUERTO: UN PUEBLO SE NIEGA A MORIR POR LA “CIUDAD FUTURA” DE PEÑA

☞ **Gloria Muñoz Ramírez** ☞

San Salvador Atenco, México

El **CAMINO ATRAVIESA** un valle de nopaleras y sembradíos de maíz, en la otrora ribera del lago de Texcoco. “De la capilla de La Purísima y hasta donde ven sus ojos abarca el nuevo proyecto”, señala el ejidatario Adán Espinoza, indicando con el dedo, desde el cerro de Huatepec, las tierras que contemplan los mapas del megaproyecto Ciudad Futura, la nueva amenaza que se cierne sobre la región, y que será, dicen los pobladores, una especie de Santa Fe, con proyectos inmobiliarios, megaindustria y, por supuesto, un aeropuerto, la afrenta más grande para estos pueblos.

Hortensia Ramos, profesora originaria de Nexquipayac, una de las tantas mujeres que dieron la lucha en 2001, acompaña también la travesía por los campos nuevamente en disputa. Son ambos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), la emblemática organización que se opuso en 2001 a la construcción de un aeropuerto en San Salvador Atenco, con el que los despojarían de sus tierras. En 2002 el Frente ganó la primera batalla y lograron, previas movilizaciones, la anulación del decreto de expropiación. Hoy, más de 12 años después de esa victoria, la amenaza vuelve a sobrevolar su territorio.

Este proyecto “es peor que el anterior”, advierten por su parte los ejidatarios Marcial Ramírez, David Pájaro y Santiago Medina. En 2001, indica Jorge Oliveros, otro de los ejidatarios que se ha mantenido en la lucha estos doce años, “nos ignoraron, nos amenazaron, nos dividieron. Hoy quieren volver a hacerlo”, con el agravante, advierte, de que “ahora es más ambicioso. En 2001 eran mil 100 hectáreas las que nos querían arrebatar. En 2013 el proyecto filtrado por ICA contempla mil 500 hectáreas de San Salvador Atenco”, de un total de más de 15 mil que abarca todo el proyecto sobre lo que fue la ribera del lago de Texcoco, en la zona oriente de la Ciudad de México.

El plan, llevado a cabo de casa en casa, es decirle a los ejidatarios que ya todos han vendido, que sólo faltan ellos: “Presentan unos mapas en los que dicen que los ejidatarios ya entregaron sus documentos, y que están en trámites para la venta. Pero esto no es cierto. Es la minoría la que ha entregado documentos, pues estamos hablando de unas 50 hectáreas, que ni siquiera han vendido

La diferencia con el anterior aeropuerto, indica, “es que no dan la cara. Mandan a gente de nuestra propia comunidad para meter amenazas. De un millón 400 mil pesos por hectárea que estaban dando hace un año, ahora el ofrecimiento es de un millón 750 mil pesos”. El plan, llevado a cabo de casa en casa, es decirle a los ejidatarios que ya todos han vendido, que sólo faltan ellos: “Presentan unos mapas en los que dicen que los ejidatarios ya entregaron sus documentos y que están en trámites para la venta. Pero esto no es cierto. Es la minoría la que ha entregado documentos, pues estamos hablando de unas 50 hectáreas, que ni siquiera han vendido”.

El relato del campesino Delfino Martínez es parte de este complejo escenario. “Nuestros hijos quieren vender, ésa es la mera verdad. Aquí en el pueblo hay unas personas que están organizando y convenciendo. Son intermediarios, nos conocen, se acercan y dicen, ‘anda, ya vende, ya todos están vendiendo’. A mí me da coraje cómo son tontos. A mí me ofrecen un millón 700 mil pesos por hectárea, pero yo tengo ocho hijos, de dónde va a salir para su casa de cada uno. Ellos ya no van a tener dónde vivir ni de dónde comer. Hay muchos que ya están parando la manota, pero desgraciadamente se van a quedar sin terreno, sin dinero, sin casa, sin nada”.

Una lucha que no termina

Trinidad Ramírez, mejor conocida como *Trini*, también figura emblemática de la lucha de Atenco y del acompañamiento con otros movimientos del país, advierte que “las declaraciones del gobierno federal nos mueven nuevamente a la lucha por la defensa de la tierra, que nunca la hemos dejado. Nos lleva a decir aquí estamos, no nos hemos rendido, pues la tierra se defiende toda la vida”.

“Nosotros”, dice *Trini*, “hace doce años dijimos: ¿y cuándo el gobierno nos preguntó si queremos vender la tierra? Y por eso ahora el gobierno aprendió a preguntar. Les dice a los campesinos ¿quieren vender su tierras? Pero nosotros también aprendimos. Aprendimos que el territorio no se trata sólo de la tierra, sino que significa nuestras costumbres, nuestras raíces”.

Desde el 2002, explica Jorge Oliveros, cuando se canceló el aeropuerto, “nosotros sabíamos que no iban a quitar el dedo del renglón y continuarían al acecho. En 2003 y 2004 empezaron a hacer obras que estaban contempladas en el proyecto general anterior. Hicieron las vialidades alternas, se fueron apoderando del agua de los manantiales de la montaña, empezaron a privatizar los comités de agua potable. En Texcoco no teníamos un hospital, pero activaron el Hospital Regional, hicieron libramientos, el circuito exterior mexiquense, es decir, las obras alternas continuaron porque nunca se quitaron su intención”.

David Pájaro, nativo y ejidatario de Atenco, además de ingeniero agrónomo, señala que en internet se detalla el modelo “México, Ciudad Futura”, en el que figuran tres planos que muestran la pérdida de toda la superficie ejidal de Atenco como pueblo. “Por lo que vemos”, explica, “va otra vez de la orilla del río Chimalhuacán hasta la orilla del cerro de Chiconautla, todo lo que se conoce como la ribera de Texcoco. Estamos hablando de unas 25 comunidades afectadas dentro de una superficie de alrededor de 7 mil hectáreas”.

División, peleas y desintegración en los que ya vendieron

El municipio de San Salvador Atenco está conformado por cinco pueblos: San Salvador Atenco, San Francisco Acuecomac, Zapotlán, San Cristóbal Nexquipayac y Santa Isabel Ixtapan. Los dos últimos, indican los ejidatarios entrevistados, empezaron a vender sus tierras desde hace más de un año. Ixtapan vendió 500 hectáreas y Nexquipayac, otras 360; además de la colonia Francisco I. Madero, con otras 40. Todas estas tierras rodean San Salvador, que es el núcleo más grande, con 958 ejidatarios.

Hortensia Ramos señala que en su pueblo, Nexquipayac, empiezan a verse los estragos de la venta: “el hecho de que te den un dinero se nota. Ya han empezado a arreglar sus casas o comprarse una moto, pero también el dinero se les está terminando y ahora no tienen tierras ni dinero”.

El dinero, dice, “es como la mismísima cola del diablo. Causa división. En la misma familia sucede que el abuelo que recibió un millón de pesos, tiene que repartirlo entre los hijos y los nietos. Y ya están los casos en los que no quedan conformes y es un peleadero entre ellos y una desintegración familiar. Esto no lo ven los que están vendiendo, pero está pasando. También se vino una oleada de robos y secuestros tremenda. Algo que no existía en esta comunidad y es también producto directo de las ventas de las tierras, pues había dinero momentáneo y se empezó a notar”.

“Por eso”, coinciden los entrevistados, “en el poblado San Salvador Atenco no vamos a vender” ☞



Cuchillo, Huajuapán de León, 2007. Foto: **Rame Cuen**

ABANDONADOS Y AGREDIDOS

Alfredo Zepeda

DESDE LOS PUEBLOS náhuatl, otomíes, tepehuas y campesinos del norte de la Sierra Madre Oriental, pueden divisarse con más claridad los contrastes sociales y las injusticias, y reflejarse los avatares de los pueblos indígenas del país.

Éstos nunca han sido los hijos predilectos de régimen, más bien han sido relegados a las regiones sociales de la exclusión. Y para calificar la actitud del gobierno hacia los pueblos originarios en los dos sexenios que ahora terminan, podemos usar dos palabras: abandono y agresión.

De por sí los indígenas de México y de América Latina siempre han luchado desde la resistencia activa en los siglos de colonización, casi todo el tiempo pacíficos y negociadores de la sobrevivencia, pero a veces en rebelión.

En México apareció por todos lados la lucha por la defensa de los territorios y la dignidad, frente al caciquismo y el despojo: en la Huasteca y en Michoacán, en las sierras de Oaxaca y Veracruz. Señaladamente tseltales, tzotziles, choles y tojolabales en Chiapas resistían la violencia de los terratenientes. El primero de enero de 1994, la rebelión zapatista sacudió al país tomando siete ciudades, incluida San Cristóbal de las Casas. La guerra de los doce días culminó con el clamor de los sectores más honestos de la sociedad mexicana contra la represión y la injusticia ancestral. Los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo fueron obligados al diálogo, cuyo punto culminante fueron los Acuerdos de San Andrés Sacamch'én. Parecía que se abrían las puertas para reconocer los derechos de los pueblos y la autonomía indígena, pero el diálogo fue de nuevo traicionado por los gobiernos. Tras años de movilización hasta llegar a la gran Marcha del Color de la Tierra en el 2001, el Estado mexicano deshonró su palabra, cerró las puertas y despidió a los indios mexicanos sin reconocerles sus derechos.

Los poderes nunca pudieron arrebatar la dignidad indígena, visible a los cuatro vientos. Nunca más los pueblos indígenas podrán ser tratados impunemente como objetos. El indigenismo desapareció. La palabra de la gente se socializó en inéditas maneras de decir, cambiando el lenguaje de las anteriores revoluciones. Por las comunidades del país circuló la nueva consigna: vivir la autonomía de hecho, sin el permiso de los de arriba.

Los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, son los sexenios del abandono, sumado al olvido del campo mexicano y a la agresión.

La conversión del Instituto Nacional Indigenista (CNI) en la Comisión para el Desarrollo Indígena en la práctica borró de sus objetivos la defensa de los derechos indígenas para concentrarse en la gestión de los llamados proyectos productivos, sin seguimiento ni integración con los sistemas económicos de las comunidades. Cualquiera que recorra los caminos de las sierras del país donde viven los pueblos indígenas se topará con los cascarones de porquerizas, gallineros, corrales de borregos y bodegas de acopio, diseñadas desde las oficinas de los Centros Coordinadores de la CNI sin consultar a los pueblos.

Se inauguró la era del clientelismo individualizado con los programas Solidaridad, después Progresos y luego Oportunidades. Tres nombres marcados por la individualización del trato, en contraste frontal con los modos comunitarios de los pueblos. Estos programas, ini-

ciados por Salinas y seguidos en progresión lineal por Zedillo, Fox y Calderón no operan correspondiendo al derecho de los pueblos, sino como una dádiva, un apoyo controlado a la distancia por las computadoras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Embajadores anónimos y regañones reparten de uno en uno los 500 pesos para que la mano que recibe pueda agradecer el favor. Pero cada hombre y cada mujer indígena han de retribuir con faenas impuestas y con la asistencia a pláticas en un idioma que no es el suyo. Ya el obispo Casaldáliga llamaba a estos programas compensatorios "migajas solidarias de la miseria".

Una necesidad que obviamente está en la epidermis de las comunidades marginalizadas es la salud, a la que corresponde otro derecho incumplido. La necesidad parece agravarse en los últimos años por los deterioros causados por los cambios en la alimentación, inducidos por los productos chatarra que penetran hasta la última comunidad.

Parece que el último estertor institucional de los gobiernos para ofrecer algún servicio estable de salud en las zonas indígenas fue el sistema IMSS-Coplamar, en 1980. En el municipio otomí de Texcatepec, con nueve mil habitantes, el más marginado del norte de Veracruz, se instalaron seis clínicas de primer nivel, con un consultorio, una cama y el cuarto habitación del doctor. El programa tenía buenas promesas de estabilidad por el respaldo logístico del IMSS, con el cuadro básico de medicinas, un doctor y dos enfermeras. Con los gobiernos del PAN, el nombre cambió a IMSS Oportunidades. Hoy, a treinta y dos años de distancia, ni una sola clínica fue añadida a las primeras. De las 22 que componen una sección en Texcatepec y Tlachichilco, en la sierra del norte de Veracruz, la mitad no tiene doctor ni medicinas.

La comunalidad de los pueblos ha preservado y enriquecido la ecología de nuestro país, pero la privatización, al abrigo de la desregulación legal, se tradujo en devastación. Los cambios al artículo 27 constitucional ya muestran sus efectos devastadores. Desde los años noventa se agudiza la entrega de estas posesiones comunales a las empresas transnacionales, mediante concesiones y sociedades mercantiles.

Ahora somos testigos de la agresión sistemática contra los pueblos y sus territorios por la entrega escandalosa de permisos mineros a empresas como la canadiense Gold Corporation y otras multinacionales. La destrucción de los bosques, por la vía de la desregulación, mantiene implacable la tasa de 400 mil hectáreas anuales de deforestación. Las mafias entran en los territorios de los purépechas en Cherán con toda la violencia y muerte de la que somos testigos. Igual sucede en la Sierra Tarahumara, en Oaxaca y en Chiapas. Los huaves y zapotecos levantan protestas contra la invasión de sus tierras comunales por los proyectos de energía eólica de las empresas españolas.

El proyecto petrolero, que se llamó Paleocanal de Chicontepec y ahora se llama Activos de Aceite Terciario del Golfo, invade el territorio de los náhuatl, otomíes y totonacos de la Huasteca con la perforación potencial de 15 mil pozos, con la intervención de las transnacionales Halliburton, Slumberger y Wetherford, entre muchas otras.

La más terrible amenaza se cierne hoy sobre los pueblos por la terca iniciativa de Felipe Calderón —en acuerdo con las empresas Monsanto y Pioneer— para la siembra comercial del maíz transgénico, pese a las protestas de científicos independientes y el clamor de los pueblos. Este alimento, regalo de los pueblos indí-



Alicia en el país de Zapata, 2010. Foto: Nadja Massun

Alfredo Zepeda, colaborador frecuente de Ojarasca, ha vivido por décadas con las comunidades de la Sierra Norte de Veracruz. Actualmente es coordinador de Radio Huayacocotla, *La Voz de los Campesinos*, la radio comunitaria independiente más antigua del país. En la revista *Ibero*, núm. 23, "México en el siglo XXI", apareció otro texto con contenidos semejantes a éste "Los pueblos indígenas, entre el abandono y la agresión".

genas de México para el mundo, está en peligro, y con él la sobrevivencia misma de los indígenas.

Consecuencia de estas agresiones es la emigración explosiva de miles de tlapanecos, amuzgos, otomíes, tseltales y tepehuas al trabajo indocumentado en los restaurantes y lavaderos de carros en Nueva York en la última década; también a las fábricas de pollos y cerdos en Carolina del Norte. Allí se juntan con los campesinos salvadoreños y los quichwas del Ecuador, en medio de peligros cotidianos por la discriminación y la ola antiinmigrante.

Con todo, el tejido social en los pueblos no está desbaratado. Las comunidades se siguen juntando al filo de la agresión en organizaciones como el Congreso Nacional Indígena, la Asamblea de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz, y acudiendo al Tribunal Permanente de los Pueblos. Hay una tensión por seguir aprendiendo a vivir con autonomía, con la experiencia de mil años en la organización comunitaria y en los sistemas de cargos, por lo que no hay recetas ni parches para componer desde los gobiernos en turno la vida de las comunidades.

Solamente podrá restaurarse la convivencia y el derecho de los indígenas, de parte del Estado mexicano, si se opera un nuevo pacto con los pueblos originarios que incluya el cumplimiento pleno de los Acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la OIT y, sobre todo, de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo estribillo repite que no se pueden tocar personas ni territorios indígenas sin un acuerdo libre, previo e informado. No retornaremos al tiempo en que los indios podían ser tratados sin acuerdo. Por lo demás, los pueblos indígenas no son el remate, son la solución. En eso le va la vida a nuestro país

CRECE LA RESISTENCIA A LOS MEGAPROYECTOS EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

Carla Zamora Lomelí

Zacapoxtla, Puebla

DESDE HACE AL menos dos años, la sombra de los megaproyectos amenaza lentamente a la Sierra Norte de Puebla. Sin información ni transparencia por parte de las autoridades o empresas, y sin consulta previa a los pueblos indígenas, las presas hidroeléctricas y la minería

a cielo abierto intentan avanzar en esta región. "La gente sólo sabe que van a llegar unas máquinas y que van a venir más, o encuentran brechas abiertas por los ingenieros para llegar al agua", dice Florencio Carlos Zabaleta, presidente de la Unidad Indígena Totonaca Nahua (Unitona), una de las organizaciones que en julio del 2012 integraron el Consejo Tiyat Tlali, red de colectivos

de diversos orígenes, entre las que también se encuentran la Unión de Cooperativas Tosepan, la Maseual Siuamej Mosenyolchicauani, la Universidad de la Tierra en Puebla y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que acompañan los procesos de organización y resistencia de las poblaciones afectadas por los llamados proyectos de muerte.

Dichos proyectos, promovidos por la anterior administración del gobierno federal, incluyen, según el Consejo, 27 concesiones mineras para la explotación de oro, plata, cobre, zinc y plomo; 5 hidroeléctricas y aproximadamente 50 ciudades rurales en los municipios de Ahuacatlán, Tetela, Ixtacamaxtitlán, Zautla, Zacatlán, Teziutlán, Hueyapan, Huehuetla, Cuetza-

lan, Zapotitlán, Tlapacoya, Hermenegildo Galeana, Zaragoza, y Tlatlauquitepec, en el estado de Puebla (<http://consejotiyatlali.blogspot.mx>).

Así, empresas y gobiernos locales avanzan en el desarrollo de los proyectos, como en la comunidad de San Mateo Tlacotepec, donde tiene lugar la construcción de una presa por parte de la empresa Comexhidro. "Llegaron los ingenieros a buscar el lugar que requieren para su objetivo, pero como la gente no tenía sus documentos para vender sus predios, les tramitaron los títulos de propiedad y les armaron los expedientes sólo para hacer las transacciones de venta, pagando el metro cúbico de tierra a entre 8 y 11 pesos", señala Zabaleta. Sin embargo, las consecuencias de la presa



Abarrotes Juan Peralta, sierra Mazateca, 1992. Foto: Ivan Alechine

provocarían la escasez de agua, pues se planea utilizar entre el 80 y 90 por ciento del caudal de los ríos para la generación de energía eléctrica que requerirán los proyectos mineros.

"Este tipo de proyectos traen en el fondo la muerte del río porque será desviado de su cauce natural, la poca agua que deje se podrá evaporar y provocaría la muerte de las especies y de las mismas comunidades, dado que además de la escasez, vendría la quiebra económica de muchas familias porque el río también lleva arena y grava que aprovechan las familias para vender. A nivel cultural también traería destrucción, pues dentro de los ríos hay sitios sagrados donde la gente recrea su propia espiritualidad", indica Camerino Aparicio González, asesor de la Unitona.

Frente a estos avances ha emergido también la resistencia de las comunidades, como en Olintla, en el municipio de Zaragoza, donde los pobladores han reafirmado su negativa a la construcción de una presa del Grupo México ante las graves afectaciones sociales, ambientales y de desplazamiento forzado que podrían vivir las comunidades totonacas, según una declaración firmada el pasado 16 de marzo por las comunidades de Bibiano Hernández, Olintla, Ignacio Zaragoza, Chipahuatlán, El Crucero, Vicente Guerrero, Dimas López, Ayotoxco, Tlapacoyan, Hueytamalco, Filomeno Mata, Lacanuy, Tanipatapo, Hueytalpan, El Espinal, Poza Rica y Papantla.

Las exploraciones mineras han encontrado la resistencia de las comunidades. Un referente es la experiencia de la comunidad Tlamanca, en Zautla, donde en noviembre del 2012, la asamblea de 32 comunidades lanzó un ultimátum para la salida de la minera china JDC del yacimiento La Lupe, logrando la clausura de esta explotación (*La Jornada de Oriente*, 5/11/2012). La amenaza de otros seis proyectos en el mismo municipio sigue latente.

De igual manera, en Tetela se ha organizado un frente de resistencia contra el proyecto para la explotación de plata y oro de la minera Espejera, filial del Grupo Frisco (parte de las inversiones que han incrementado las ganancias de Carlos Slim en el ramo). La organización Tetela hacia el Futuro ha realizado diversos foros y manifestaciones para oponerse a estos proyectos, ante lo cual la empresa ha publicado en medios locales sus ofertas para la comunidad, entre las que se incluyen, como parte de sus apoyos sociales, centros de capacitación para acceder a la bolsa de trabajo de la empresa y campañas de reforestación. Empero, no se plantean esquemas de sostenibilidad de tales apoyos, "va a haber dinero para el empresario y a cambio de eso nos va a desmadrar todo el medio ambiente, pero si no lo analizan, la gente cree que habrá fuentes de trabajo y desarrollo pero ¿cuántos meses? ¿Y después?", cuestionan los voceros de la Unitona.

Además, en Zoquiapan, la asamblea comunitaria logró que el presidente municipal, Esteban Pérez, se comprometiera a negar la posibilidad de instalación de una hidroeléctrica a la empresa Ingdeshidro (*La Jornada de Oriente* 29/03/2013). Este compromiso es particularmente importante, porque se considera que en otros casos "las autoridades municipales están actuando para apoyar a la empresa, y se están valiendo de todos los lazos de autoridad e incluso de caciques locales para legitimarlo", apunta Camerino Aparicio.

Por ello, "nos toca actuar demandando a quienes autorizan los proyectos, porque no pueden estar dando permisos que atentan contra la vida de los pueblos, donde se están violando derechos y están pasando por encima de la ley. Esto es sólo el principio, el sistema va a forzar a la gente a defender la tierra y el territorio. Es gente valiente que no tiene miedo", concluye Zabaleta. Así, en respuesta a los proyectos de muerte, florece la resistencia indígena

PERO SE COMBATE A LOS Q'ANJOB'AL QUE DEFIENDEN SU TERRITORIO

✎ Marta Molina ✎

Huehuetenango, Guatemala

MIENTRAS PROSIGUE EL juicio contra el ex general Efraín Ríos Montt, quien aterrizó al país durante la dictadura de los años ochenta y es juzgado por crímenes contra la humanidad, el actual gobierno reprime con violencia a la población maya que se organiza para defender sus tierras de la extracción de recursos por compañías extranjeras. A la llegada de un gobierno de ex militares expertos en inteligencia y contrainteligencia, quienes fueron piezas clave durante la guerra, Guatemala se vuelve a militarizar.

Durante años, la población q'anjob'al se ha organizado en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, para defender su territorio contra un megaproyecto hidroeléctrico de capital español en el río Q'ambalam. A pesar de la represión, el hostigamiento y hasta la implantación de un estado de sitio durante 17 días en mayo del 2012, siguen luchando por su río, su territorio y sus derechos. Bajo el lema "Todos somos Barillas" conquistaron la liberación de los presos políticos el pasado 9 de enero, después de 242 días de su detención ilegal.

"El agua es vida y este proyecto sólo nos trae muerte y violencia", comenta Micaela, vecina de la comunidad Cantón Recreo B, que desde 2007 se resiste a la implantación de la empresa Ecoener Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz en el río que pasa a escasos metros de su casa.

El proceso de consultas, la vía del diálogo, la organización comunitaria y la movilización pacífica siguen siendo las formas de lucha de las comunidades aledañas que se oponen a los proyectos hidroeléctricos Q'ambalam I y II. El rechazo a las transnacionales, en concreto Hidro Santa Cruz, se evidenció en varias asambleas comunitarias y Consultas de Buena Fe. Aún así, la empresa empezó a trabajar en la zona.

"Nuestras demandas están no sólo en las actas de las reuniones de los pueblos de Santa Cruz Barillas, que desde 2007 exigen que se vaya la empresa, sino también en las calles y comunidades", comenta Hermelinda Simón. Consciente de la división impulsada por la empresa y el gobierno, se dedica a tareas de información y capacitación en organización comunitaria para sensibilizar a los vecinos sobre los impactos de los megaproyectos en el territorio.

La empresa promueve su imagen de "limpia y benéfica para la comunidad" argumentando, en palabras de Hermelinda, "que todo lo que genere será para el pueblo, que sembrará arbolitos, dará empleos a los hombres y a las mujeres trabajo porque lavarían sus pantalones". Pero aún hay comunidades muy retiradas del río y no tienen completa la información. Aprovechando esta situación, "la empresa ha hecho una publicidad tremenda a través de la red de cable y radio local, y ha comprado gente para que vaya a las comunidades a mal informar los supuestos beneficios y nunca las desventajas". Los líderes comunitarios van comunidad por comunidad y puerta por puerta a informar de las consecuencias del proyecto hidroeléctrico para su vida cotidiana.

Mientras crece la organización de las comunidades aledañas al Q'ambalam, el gobierno inició, en 2011, la persecución penal contra sus líderes. En mayo pasado, Hermelinda, por ejemplo, fue acusada de detención ilegal, narcotráfico, desorden público, coacción y terrorismo. No es la única que recibe estas acusaciones. Según explica Carlos Manuel Bezares, abogado del caso Barillas, el gobierno utiliza la figura de terrorismo para perseguir a las comunidades en resistencia y a las organizaciones, considerando que la toma de carreteras y las movilizaciones son "actos terroristas", y justifica la represión ante la opinión pública.

Así como sucedió durante la guerra civil, se hostiga a los líderes comunitarios en varias regiones del país. El pasado 4 de octubre, los k'iche organizaron una protesta pacífica en el departamento de Totonicapán contra el alza de

Esta reconfiguración ideológica del "enemigo" como "terrorista" implica una nueva contrainsurgencia en la que se quiere vincular a los líderes sociales y sus demandas con los intereses del narcotráfico y el crimen organizado

tarifas eléctricas, la instalación de hidroeléctricas y la explotación minera. La represión del ejército dejó ocho comunitarios muertos. Esta reconfiguración ideológica del "enemigo" como "terrorista" implica una nueva contrainsurgencia en la que se quiere vincular a los líderes sociales y sus demandas con los intereses del narcotráfico y el crimen organizado. El caso más reciente es el de Rubén Herrera, detenido el 15 de marzo. Oponerse a la empresa puede costar la vida o prisión.

"La compra de terrenos aledaños fue otra estrategia de Hidro Santa Cruz para dividir a los vecinos organizados y asentarse al lado del río", afirma Hermelinda. Uno de los comunitarios a quien ofrecieron comprarle su terreno fue Pablo Antonio Pablo. Se negó. Tiene 59 años y el pasado 1 de mayo recibió un tiro en el brazo cuando asesinaron a su compañero, el campesino Andrés Francisco Miguel. Parece que el atentado iba contra Pablo, por negarse a vender. Un año después pasea por el camino donde fue baleado y cayó muerto Andrés. Ante a una cruz de piedra asegura que si no pierden el miedo no podrán seguir luchando. A sus palabras se suman las vecinas del Cantón Recreo B: "Ya quitaron a nuestros abuelos abuelas y antepasados de sus casas durante la guerra. ¿Y ahora, a dónde nos quieren mandar?" comenta en q'anjob'al una mujer indignada.

"Cuando el pueblo se organiza, sufre represión, aunque sea pacífico", comenta Pablo. En otras regiones de Guatemala donde se están organizando contra la imposición extractiva enfrentan la misma violencia. El 17 de marzo asesinaron al líder xinka Exaltación Marcos en la comunidad de la montaña Santa María Xalapán, Jalapa, y torturaron a otros tres; regresaban de una reunión donde se discutió la organización de una consulta comunitaria sobre minería en Mataquesuintal.

"Quiéren imponernos el miedo, como hicieron los que están siendo juzgados hoy", comenta Rocaél, de 21 años y vecino de Barillas. Lo que cuenta demuestra que la represión no es sólo parte del pasado de Guatemala. En mayo, cuando se anunció el estado de sitio, huyó a las montañas con su mamá embarazada. Otras familias huyeron a la frontera con México. Por primera vez en su vida, Rocaél entendió el miedo de sus abuelos durante el conflicto armado (1960-1996), "cuando el ejército los expulsó de sus casas con el pretexto de que eran guerrilleros y tenían armas".

"Desde que se vino la empresa está la violencia", comenta Micaela, vecina y organizadora del movimiento anti-hidroeléctrico. La zona quedó militarizada. Según Bezares, podrían militarizarse otras regiones donde se quiere impulsar proyectos extractivos, por ejemplo La Puya.

Un hombre mayor explica en q'anjob'al que es precisamente en comunidades que sufrieron la guerra donde se implantan los modelos de supuesto desarrollo. El mapa del conflicto armado pareciera coincidir con los proyectos extractivos ☞



San Mateo del Mar, 2008. Foto: Nadja Messuri

El desarrollismo de Mancera Y LA DESTRUCCIÓN DE XOCHIMILCO

✎ Jaime Quintana y Adazahira Chávez ✎

Xochimilco, Distrito Federal

LA CONSTRUCCIÓN DE una gigantesca tienda de autoservicio Chedraui, la imposición de un corredor ecoturístico, el aprovechamiento mercantil de los panteones comunitarios y la extracción del agua en Xochimilco, "son parte de una estrategia de despojo que sufren los pueblos por parte de las empresas en la ciudad de México", denuncia Alberto Guerra, veterano de las luchas indígenas de la capital del país.

Conocido entre los habitantes de la delegación como "el profe", Guerra señala que Xochimilco, lugar reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987, está en caos: desempleo, contaminación de las aguas, proliferación de asentamientos irregulares, descenso en la producción agrícola y escasez de espacios públicos gratuitos para esparcimiento son algunos de los problemas que existen en esta zona, que cuenta con 189 kilómetros de canales y con un 86 por ciento de su superficie como suelo de conservación.

Una gran parte de la responsabilidad de esta situación está en las acciones y programas gubernamentales, ajenos a las necesidades de los habitantes, no sustentables y que rompen la comunalidad de los pueblos, señala. A pesar de que la clase política afectó a la organización comunitaria, los habitantes originarios se están involucrando en la defensa de sus bienes, y realizan acciones como la clausura simbólica de las obras del Chedraui en Santiago Tepalcatlapa, las caravanas informativas por los pueblos y la toma de edificios donde despachan los coordinadores territoriales impulsados por el gobierno local.

Chinampas y autoservicios

"En lugar de apoyar a las personas que aún viven de los alimentos que siembran en las chinampas, el gobierno apoya a las empresas y a los ricos", acusa María Jiménez, comerciante local y originaria de Xochimilco.

Los pobladores de Santiago Tepalcatlapa se enteraron por casualidad de que una tienda de autoservicio Chedraui se instalaría en 16 mil metros cuadrados de su pueblo. Cuando buscaron información, empezaron a detectar las irregularidades, mientras el gobierno delegacional defendió la instalación de la tienda.

La demolición de las instalaciones que existían en el terreno comenzó sin los permisos necesarios en noviembre de 2012. La delegación concedió permiso para operar y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvivi) concedió cambio de uso de suelo del lugar a mixto (habitacional y comercial) pero, señala el poblador Juan Manuel Pérez, por la gran área que



abarca, el permiso para construir necesita más trámites, estudios de impacto ambiental y urbano, que no han sido presentados.

Francisco Luna, originario de Xochimilco, apunta que para burlar la prohibición de construir tiendas de autoservicio en zonas Patrimonio Cultural de la Humanidad, la autorización de cambio de uso de suelo asentó que se permite edificar una tienda departamental, pese a que Chedraui señala en su página de internet que su naturaleza es ser autoservicio.

Xochimilco, señala Felipe Rosas, de San Mateo Xalpa, es un lugar de agricultores y comerciantes. Con la instalación del Chedraui, temen los opositores, los típicos mercados locales de los pueblos desaparecerán y, con ellos, la fuente de ingresos de centenares de chinamperos y locatarios. Además, se agravará el tráfico vehicular y la escasez de agua que ya sufre la delegación.

Juan Alcántara, comerciante, pregunta: "¿Cuál es el progreso de una tienda de autoservicio? Se van a *chingar* lo típico". Los opositores informan que por cada puesto de trabajo que crean las tiendas de autoservicio, se destruyen diez empleos locales. "Las grandes empresas rompen vínculos sociales, que son parte de las aportaciones de los mercados o pequeños negocios", señala la joven Lina Arcazar.

Turismo, contaminación y desastre urbano

En una caravana informativa realizada por los habitantes inconformes a finales de marzo, fueron señalados otros problemas: la proliferación de asentamientos irregulares, la apropiación gubernamental de la gestión de los panteones comunitarios y la destrucción ecológica.

"La destrucción del ecosistema es por el saqueo irracional de los mantos acuíferos", señala Alberto Guerra. Por la contaminación de las aguas de los canales —aguas negras tratadas—, su bajo nivel en algunas zonas y la anegación de las chinampas en otras, los cultivos han sido abandonados. En la zona chinampera se cosechaba durazno, perejil, cilantro, espinaca, yerbabuena, lechuga, epazote, frijol. En la parte cerril se sembraba chile, tomate, haba, capulines y tejocote. De los canales, hasta hace cincuenta años se podían comer almejas. Ahora, "para los campesinos es cada vez más difícil extraer recursos de sus tierras", agrega.

Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales para recuperar la zona van en otra dirección. Guerra denuncia que existe un proyecto para construir un corredor ecoturístico "de clase mundial" que abarcaría al menos la zona lacustre de Tláhuac y San Gregorio Atlapulco, que es una parte de Xochimilco.

Los pobladores señalan que se construirá un enorme acuario, una ciclopista, jardines flotantes y un museo. No saben el nombre del proyecto, pero la información parece coincidir con la creación por parte del gobierno de la ciudad, en diciembre de 2012, de una "Autoridad en Zona Patrimonial, Mundial, Natural, Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta", que, advirtió el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante su presentación, busca impulsar "proyectos públicos y privados en materia turística y de desarrollo social".

"No es que no estemos de acuerdo con el desarrollo, pero queremos que sea de acuerdo con nuestros usos y costumbres de acá", precisa Francisco Luna. "Se trata de despojar al pueblo", resume "el profe".

El camino

"Si perdemos nuestra tierra vamos a perder no sólo nuestro patrimonio sino nuestra identidad y nuestras costumbres", señala Alberto Guerra. "el profe" ha participado en las iniciativas del EZLN y el Congreso Nacional Indígena. "Indígenas no son nada más los de Chiapas o de Oaxaca, que no se olvide", señala con firmeza, y agrega que ha pensado en la conveniencia de que Xochimilco se acoja al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la defensa de su tierra.

Como expresa Lina Arcazar, "los habitantes de Xochimilco poseemos valores que nos guían a cuidar nuestra tierra y cultura, y no permitiremos que las grandes empresas vengan a destruirnos" ☞

“¿POR QUÉ MIS CANCIONES SON TRISTES?” MIXTECOS DE LA MONTAÑA EN NUEVA YORK

✂ Rodolfo Hernández Corchado ✂

“**S**I COMENZÁRAMOS A contar la historia de cada uno de nosotros, sería demasiado tiempo para contar cómo sufrimos, cómo vivimos en Guerrero. Venimos de distintas partes del estado; y nuestros pueblos son pueblos tan pequeños que ni siquiera existen en los mapas. En esos pueblos vive gente que ha sido abandonada por el gobierno, gente que ha muerto de hambre”, cuenta Baltasar, trabajador migrante, cuya historia es un fragmento de la historia del pueblo mixteco de la Montaña de Guerrero en la ciudad de Nueva York. Esa historia que se cuenta por las noches cuando se ha concluido la faena diaria como preparador de sushi en un restaurante japonés, cuando el trajín diario en la cocina de una pizzería o de un restaurante árabe ha terminado y al final del día se encuentra el tiempo para recuperar la memoria.

La noche sirve también para ocultar la tristeza, para alejarla con la guitarra y el acordeón. Cuando la noche llega, Baltasar aleja con su música la tristeza que está ahí metida, adentro de uno. Cuando no pasa el tiempo preparando comida, Baltasar es guitarrista, cantante y animador de un grupo de música norteña cuyos miembros, como él, son meseros, ayudantes de cocinero, trabajadores en la construcción, y migrantes mixtecos de la Montaña. Trabajadores y músicos, que lo mismo amenizan las fiestas de ese exilio que llamamos migración mexicana, el Día de Acción de Gracias, o en las celebraciones de Cincos de Mayo, Días de la Independencia, Centenarios y Bicentenarios realizados por organizaciones corporativas mexicanas y respaldadas por cónsules que administran las nostalgias y los afectos de hombres y mujeres como Baltasar, cuyos pueblos “no existen en los mapas” pero tampoco en la idea de país de estos administradores en tiempos de neocolonialismo neoliberal.

¿Dónde comienza entonces la historia del pueblo mixteco en Nueva York? Un sábado de verano en nuestro camino a Filadelfia, en donde tocaría con su grupo, Baltasar me llevó a pasear por su memoria, por su niñez y por las noches en que salía junto con su abuelo a cazar venados y mapaches en el sureste de la Montaña, mientras su padre se ausentaba temporalmente para trabajar como jornalero en Sinaloa. La ausencia de su padre es historia individual y compartida por muchos otros; y “el abandono” es la experiencia colectiva, que “viene de un tiempo muy atrás”, profundo, más allá de su padre, de su madre y de su abuelo jornaleros. “El abandono” es la palabra que nombra a la exclusión y opresión política de los pueblos indios por el Estado mexicano, y es también inicio de la historia del pueblo mixteco en Nueva York. El abandono de los mixtecos tiene muchos caminos, uno de ellos pasa por el enganche y la migración temporal al noreste agroexportador mexicano. Año con año, hombres y mujeres que hoy son los nuevos trabajadores migrantes de Nueva York, abandonaban la Montaña sólo para regresar a la región unos meses después y volverla a abandonar al año siguiente. Migración temporal desde la experiencia individual y familiar; migración perpetua desde la experiencia histórica de todo un pueblo.

Si intentáramos escribir una biografía de los trabajadores mixtecos en Nueva York, encontraríamos su infancia en su paso por Sinaloa, en el trabajo infantil. “La primera vez que fui a Sinaloa” —cuenta Baltasar— “yo era muy pequeño, creo que tenía cinco años. Toda mi familia, incluyendo mi abuelo, fueron a Sinaloa” para ser “tratados como animales”. En el nacimiento de estos trabajadores está la violencia y el grito de los enganchados, las comadronas de la libre concurrencia del trabajo indígena en la fábrica global: “¿Quieren chambear, cabrones?” Los jornaleros mixtecos llevan una vida que en sus propias palabras, no es vida en sí misma: “En Sinaloa trabajábamos desde el amanecer hasta el atardecer, teníamos bajos salarios y un día de descanso. No había baños, agua potable, ni servicio de salud. La

gente bebía el agua que se utilizaba para el riego. No era vida ésa, vivíamos como esclavos, allá no es vida”, concluye Baltasar. Migrar a Nueva York es el camino para escapar de Sinaloa, donde no hay vida, para escapar del trabajo de esclavo que es pasado y presente a la vez para el pueblo mixteco de la Montaña. Pasado para quienes han migrado a esta ciudad, y presente para quienes continúan migrando.

En la segunda mitad de los años noventa, la migración indígena de municipios como Alcozauca o Xalpatláhuac siguió a la migración mestiza de Tlapa y La Cañada, que en los ochentas se dirigió a California y Nueva York. Un día, el padre de Baltasar, que “fue hombre de campo”, recuerda su hijo, “de campesino se fue” a California, para después migrar a Nueva York. En el camino, quienes antes fueron campesinos hoy son los proletarios del norte; aún así, el pasado siempre está ahí. Cuando es momento de enfrentar el abuso de caseros, planeadores y desarrolladores que ponen su pie en barrios enteros “para expulsarnos como cucarachas”; entonces, aún en la lejanía, el origen emerge: “¿Por qué quieren hacerme esto a mí? ¿Tan sólo porque soy un campesino?” Hace tiempo que dejaron de serlo, pero ante el abuso de la trinidad compuesta por el casero, el patrón y la policía, el pasado vuelve apelando al origen campesino. ¿El futuro? La supervivencia de la lengua materna es incierta. Los mixtecos nacidos en Nueva York hablan su lengua en el hogar, pero “aunque perdamos la lengua, seguiremos peleando, siempre.”

En la década de 1990, la Montaña de Guerrero y sus habitantes fueron puestos en oferta por los mandamases del país. Sin embargo, cuando entre



Visitando a mi valedor, Oaxaca, 2010. Foto: **Baldomero Robles**

sus habitantes surge el descontento a la imposición de una “vida que no es vida”, se les acusa “de estar cerrados de la mente”. Puestos a indagar en la biografía de los mixtecos por tierras gabachas, Baltasar plantea sus orígenes de esta manera: “Cuando era niño dejé la escuela y fui jornalero por un rato. Al venir a Nueva York únicamente estamos tratando de salir adelante, estamos tratando de sacar adelante a nuestra familia. Cada uno tiene su propia historia, pero la principal causa por la que hemos abandonado nuestro pueblo es la pobreza. En Guerrero los gobiernos nos tienen abandonados. ¿Sabe por qué mis canciones son tristes? Porque tuve una vida dolorosa en Sinaloa cuando fui niño, por eso es que hay tanta tristeza en mí” ☞

| **Rodolfo Hernández Corchado**, candidato a doctor en antropología por la City University de Nueva York, pertenece al sitio electrónico *Huellas Mexicanas*, dedicado a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Allí ha escrito sobre el punk y el rock indígenas de la Montaña de Guerrero.